

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

RESPECTO DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL "NON BIS IN IDEM" Y SU CONSIDERACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.- LEGITIMIDAD DE LA DOBLE PUNICIÓN

A la vista del desarrollo de las actuaciones, y de cuanto ha quedado probado, la fundamentación jurídica de la propuesta que se habrá de formular resultaría bien sencilla, pues resultando indubitado que el expedientado es autor responsable de una falta muy grave tipificada en el inciso b) del apartado 3 del artículo 27 de la Ley Orgánica de 13 de mayo de 1986 nº 2/1986 Reguladora de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, pudiendo quedar reducido los términos de esta propuesta a la fundamentación de la dosimetría punitiva. Pero en atención a la consideración que nos merece el derecho de defensa del expedientado y lo argumentado por el mismo en el pliego de descargo, invocaremos las razones que nos llevan a inadmitir tales argumentos y a rechazarlos absolutamente de plano por las razones que quedarán expuestas a continuación.

Compartimos con lo alegado, que el citado principio (non bis in idem) está reconocido en el art. 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (New York 1966) ratificado por España en 1977 a cuyo tenor: "nadie puede ser procesado o penado de nuevo por una infracción por la cual haya sido definitivamente absuelto o penado de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país".

Precepto que en España, de acuerdo con lo previsto en los artículo 10.2 y 91.6 de la Constitución, forma parte del ordenamiento jurídico interno.

La reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional español sobre este principio arranca de la importancia de la sentencia del Tribunal Constitucional 2/1981, principal precedente en esta materia, en donde se afirmó que este principio general del derecho supone que no tenga lugar una duplicidad de sanciones-administrativa y penal- cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento, considerándolo integrado en el derecho a la legalidad penal (art. 25.1. de la Constitución). Y hasta aquí, exclusivamente, prestamos nuestra conformidad a la interpretación que hace el expedientado de dicho principio para eludir la responsabilidad que hoy nos toca depurar, por cuanto que con posterioridad el propio Tribunal Constitucional ha ido aclarando el distinto alcance del principio "non bis in idem" según se produzca su quebrantamiento por la aplicación de una doble sanción, administrativa y penal, o se produzca su quebrantamiento por la aplicación de una doble sanción en un único ámbito sancionador.

La sentencia del Tribunal Constitucional 2/1981, de 30 de enero - continuadora de una dilatada corriente jurisprudencial preconstitucional (vid. SSTSa. 13 de octubre de 1958, 21 de octubre de 1960, 27 de junio de 1961 o 3 de julio de 1965)-, pudo proclamar la vigencia del principio "non bis in idem" en el ámbito sancionador salvo en los casos en que existiese "una relación de supremacía especial de la Administración - relación de funcionario, servicio público, concesionario etc.- que justificase el ejercicio del "ius puniendi" por los Tribunales y a su vez de la potestad sancionadora de la Administración".

Dicha doctrina ha sido reiterada posteriormente en infinidad de ocasiones tanto por el TC (STC 66/1984, de 6 de junio , AATC 150/1984, de 7 de marzo, 721/1984, 21 de noviembre, 781/1985, de 13 de noviembre), como por el TS (SSTS 4ª 14 de diciembre de 1982, 2 de febrero de 1984, 13 de diciembre de 1985, 3ª/ª 13 de marzo de 1991).

Las relaciones especiales de sujeción son aquellas que se producen entre la propia Administración y los administrados que se sitúan en una posición más vinculada a su organización que el resto de los ciudadanos, como es el caso que nos ocupa.

Tanto el concepto de "Derecho Administrativo Disciplinario" como el de "sanción disciplinaria" giran en torno a este tipo especial de relación jurídica, de manera que suele definirse dicha rama del Derecho Administrativo como la proyección de las potestades administrativas sancionadoras frente a quienes se encuentran ligados a la Administración por una relación estatutaria o, en todo caso, no ordinaria. Las sanciones disciplinarias, de igual modo, han sido catalogadas como las que "se imponen a las personas que están en una relación de sujeción especial con la Administración, por infracciones cometidas a la disciplina interna por la que se rige dicha relación"(García de Enterría). Es en este ámbito, pues, donde el TC incardina la compatibilidad entre sanción disciplinaria administrativa, no entendida esta última como gravamen impuesto por la condena penal a un sujeto